

LA CRISIS ARGENTINA

El experimento populista de los Kirchner

Para la Argentina, 2001 es el año más largo de la historia. Si se observa la política, ha durado ya una década. A fines de 2001 el país asistió a un estallido social que devoró tres Gobiernos –el de Fernando De la Rúa, el de Adolfo Rodríguez Saá y el de Eduardo Duhalde–, un régimen económico –el de la convertibilidad del peso con el dólar–, y un sistema político configurado por el contrapunto de dos fuerzas principales, el peronismo y el radicalismo, capaces de alternarse en el poder.

Al cabo de diez años, los argentinos repusieron el Gobierno y la economía se benefició con un ciclo de bonanza; pero el sistema político no fue reconstruido. Esa incapacidad se manifestó en el resultado de las últimas elecciones presidenciales, celebradas el 23 de octubre del año pasado. En ellas, Cristina Kirchner consiguió la reelección con el 54% de los votos. El candidato que la secundó, Hermes Binner, obtuvo el 17%. Esa brecha de 37 puntos entre quien gobierna y la principal fuerza de la oposición delata que en este país la vida pública se sigue desarrollando en medio de los escombros de aquel colapso. La crisis que se abrió a comienzos de siglo se mantiene abierta, y adquiere rasgos de cronicidad.

Carlos Pagni es periodista del diario *La Nación*.

El kirchnerismo, que es el rostro que ofrece el peronismo en estos años, se nutre de esa deformación. Es imposible explicar su ascenso y su consolidación en el poder sin recordar la tormenta que le sirvió de antecedente.

Le economía entró a mediados de 1998 en la recesión más larga de la historia nacional. En noviembre de 2001 la tasa de desempleo había alcanzado un 18,3% de la población activa. La deuda pública superó los 101.000 millones de euros. Los indicadores previos al desenlace de la crisis eran devastadores: la construcción tuvo una caída del 18,1%, y la industria automotriz una del 27,5%. El riesgo crediticio escaló hasta los 5.000 puntos básicos. El déficit fiscal exagerado y la disminución de los flujos financieros hacia los países emergentes habían hecho temer un cese en el pago de la abultada deuda externa. La perspectiva de que ya no sería posible convertir a dólares los ahorros en pesos provocó una temible fuga de depósitos bancarios.

El Gobierno radical de De la Rúa decretó un “corralito”. Es decir, bloqueó el retiro de dinero en efectivo de las cuentas de los bancos desatando la furia de la clase media. Las familias comenzaron a manifestarse en los balcones de sus casas, y más tarde en las calles, golpeando cacerolas. En las grandes ciudades se constituyeron asambleas informales alrededor de la consigna “que se vayan todos”.

Entre los más pobres, el enojo tuvo otras formas de expresión. Piquetes de desocupados interrumpieron avenidas y carreteras. Entraba en escena de ese modo el movimiento de los “piqueteros”.

La represión policial de la protesta en la histórica Plaza de Mayo dejó un saldo de veinte muertos. Así, el 20 de diciembre de 2001, se derrumbó el Gobierno de Fernando De la Rúa y, con él, un orden político fundado en el año 1983, cuando el país se reencontró con el sistema democrático, al cabo de una larga dictadura.

A De la Rúa le siguió la fugaz Administración de Adolfo Rodríguez Saá, que declaró la cesación de pagos de la deuda pública. Fue el mayor *default* de la historia financiera moderna: 100.000 millones de euros. Le

siguió Eduardo Duhalde, quien resolvió una devaluación de la moneda del 300%.

El malestar social se proyectó sobre la política con una agitación permanente de las capas medias. Ese entramado es el que siempre expresa de manera más dramática el descontento ante el ajuste. Los sectores más marginados estaban tan mal que al Estado no le resultó muy costoso reponerlos a la pésima situación en la que estaban antes de la crisis. Los más acomodados suelen contar con recursos intelectuales –propios o contratados– para prever la proximidad del desastre y ponerse a salvo. En cambio las clases medias tienen lo suficiente como para que no les alcance la asistencia estatal, pero no tanto como para adelantarse al tsunami. Son las que más protestan ante las trampas de la historia.

La dirigencia política, impugnada en su legitimidad, reaccionó a esa efervescencia pública con un miedo que no es la preocupación virtual de quien lee las cifras del desencanto en un sondeo de opinión; es el temor físico de quien conduce un barco amotinado. A partir de diciembre de 2001, y por un periodo muy largo, los políticos argentinos dejaron de concurrir a los restaurantes habituales. Era más frecuente verlos cenar en los hoteles, rodeados de extranjeros incapaces de identificarlos. Las escenas de violencia contra ellos eran habituales.

El miedo de los dirigentes a los dirigidos está en el corazón de la larga crisis argentina. Los representantes comenzaron a ver a la sociedad como un animal impredecible y peligroso. La reacción de la dirección del país ante esa perturbación amenazante fue un reflejo demagógico. Las grandes convulsiones económicas corroen la autoridad de la política. Los líderes eluden, porque no pueden o no quieren, pagar costos. Quedan impotentes, en consecuencia, para el ejercicio de su misión más importante: la de ser mediadores entre el presente y el futuro. El populismo, en cuya esencia está el sacrificio de ese futuro en aras del presente, se alimenta de la degradación de la política. No debe llamar la atención, entonces, que regímenes como el de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, hayan emergido del naufragio del sistema de partidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Una diferencia crucial con otras modulaciones de la izquierda la-

tinoamericana, como la del PT brasileño o la del Frente Amplio uruguayo, que introdujeron un cambio dentro del orden preexistente.

Néstor Kirchner llegó al poder el 25 de mayo de 2003, de la mano de Duhalde, quien abandonó la Presidencia antes de tiempo, aterrorizado por las eventuales consecuencias de la muerte de dos jóvenes piqueteros por las balas de la policía.

Si la escena a la que se incorporaba ya era bastante estimulante para un experimento demagógico, él cargaba con un estigma que reforzaba esa orientación. En las elecciones de 2003 había obtenido solo el 22% de los votos. Pero fue presidente porque Menem, el vencedor de la primera vuelta, se retiró de la contienda. Kirchner llegó a la Presidencia por descarte. Su figura era casi desconocida. Ese fue su primer activo; ese desconocimiento permitía el simulacro de una renovación.

Ansioso por compensar la falta de votos con popularidad, Kirchner se propuso ser el vocero de la “Argentina cacerolera”. Como si la hubiera leído, siguió aquella recomendación de Maquiavelo al Consejo de Florencia sobre cómo ocupar un territorio ajeno: “Se debe halagar a la plebe, y mostrarse despiadado con aquellos a los que la plebe adjudica su infortunio”.

Kirchner puso en el banquillo de los acusados a los bancos, que habían capturado los depósitos del público; a las empresas de servicios, muchas de ellas españolas, que pretendían una actualización de sus tarifas acorde a la devaluación de la moneda; a los empresarios, señalados como responsables de la ola de desocupación que acompañó la decadencia de la convertibilidad; a los acreedores externos, que exigían el pago de sus títulos; a “la corporación política corrupta”; y al aparato judicial, que tiene en la Argentina, por infinitas razones, un desprestigio crónico.

Esta interpretación de los males nacionales, para la cual “el infierno son los otros”, condicionaría la gestión de la política internacional del kirchnerismo desde entonces hasta ahora; cualquier relación externa debería subordinarse a la satisfacción de urgencias e imperativos domésticos. Cual-

quier interés es accesorio frente a la necesidad de llegar al fin del día sin que se produzca una pueblada*.

La economía ayudaría a Kirchner para alcanzar ese objetivo. En el primer trimestre de 2003, coincidiendo con su ascenso al poder, comenzó la salida de una contracción de cinco años. La gran devaluación de la moneda, heredada de Duhalde, se convirtió en una membrana protectora para la producción local. La sustitución de importaciones estimuló la creación de empleo y aceleró la expansión.

La política económica no se basó en metas de inflación sino de crecimiento. Kirchner encontró un aparato productivo con una capacidad del 50%. La expansión de la demanda tardaría mucho en presionar sobre los precios. De esta peculiaridad estarían exceptuados, sin embargo, dos sectores: el energético y el alimentario. El tipo de cambio alto alinearía esos dos mercados con los altos precios internacionales. El Gobierno se propuso aislarlos congelando los precios. El *boom* en el precio de las *commodities*, sobre todo de la soja, que comienza en 2003, permitió suponer que esa estrategia era viable.

La Argentina se define en los últimos veinte años por tres novedades: la incorporación al consumo de las muchedumbres asiáticas, sobre todo de India y China; la aplicación de nuevas técnicas de trabajo de la tierra, como la siembra directa; y la producción de especies más resistentes a climas adversos como resultado de alteraciones genéticas.

La combinación de estos factores expandió la frontera agraria, un proceso denominado “sojización” del campo. La tonelada de soja, que en 2000-2001 llegaba a los 125 euros, cotizó en los últimos tiempos alrededor de 385 euros. La participación de esa oleaginosa en el total de lo sembrado, que era del 39,65% en 2000-2001, es ahora superior al 60%.

El tesoro nacional se asoció a esta riqueza a través de las retenciones al precio de las *commodities*. Desde 2002, cada vez con mayor intensidad, el Estado se queda con una parte de los ingresos de los exportadores. En no-

* Nota del editor: Revolución

viembre de 2007, el kirchnerismo llevó las retenciones a la soja del 27% al 35%. El poder ejecutivo está autorizado a modificar esa alícuota sin intervención del Congreso de la Nación. El precio de las *commodities*, sobre todo de la soja, tuvo un incremento tan formidable que hoy el Tesoro percibe en concepto de retenciones el equivalente al valor total de las exportaciones de soja del año 2003.

Por primera vez en muchas décadas, la Argentina conoció un Estado rico. La novedad tuvo consecuencias cruciales para la política. En principio, concedió al sector público un nivel de autonomía financiera que reforzó la tendencia del kirchnerismo al aislamiento internacional. El sector público podría financiarse sustrayéndose al monitoreo de los mercados internacionales.

Las retenciones se convirtieron también, en manos de Kirchner, en un instrumento para disciplinar al resto de la dirigencia política. Este impuesto no se coparticipa con las provincias. La recaudación queda en manos del poder central. Los gobernadores de provincia, que constituyen la estructura central del peronismo, se allanaron a la celebración de un pacto de vasallaje con la Presidencia de la Nación, gracias al cual conseguirían recursos extraordinarios para realizar obras públicas, a cambio de una rígida obediencia al liderazgo kirchnerista. El federalismo, que está consagrado en la Constitución Nacional como una de las características de la forma de gobierno, tuvo en estos años un enorme retroceso en el país, gracias al cual Néstor y Cristina Kirchner constituyeron un “unicato”^{*} territorial de hierro.

La concentración fiscal fuerza el vasallaje de los gobernadores con el poder central. Dos o tres veces por semana los jefes provinciales deben trasladarse a la capital del país para aplaudir anuncios de la presidenta. Esa obediencia tiene expresiones más graves. Para facilitar el avance estatal sobre los activos de Repsol en YPF, los gobernadores de distritos con recursos petroleros revocaron concesiones realizadas por ellos mismos después de una llamada telefónica de la Casa Rosada.

* Nota del editor: En Argentina, sistema de influencias políticas que, desde el poder, reúne en la figura institucional del presidente de la República la jefatura única e indiscutible del partido gobernante.

El valor político que el kirchnerismo concedió a esas retenciones, sobre todo a las del sector agropecuario, tuvo una manifestación dramática en marzo de 2008, cuatro meses después de que Kirchner fuera sustituido por su esposa en la Presidencia. En aquel momento el precio internacional de la soja había llegado a los 440 dólares por tonelada, registrando una subida trimestral del 27%, y una anual del 86%. El ministro de Economía de aquel entonces, Martín Lousteau, ideó un mecanismo por el cual la alícuota que el Estado aplicaría a la retención acompañaría los movimientos ascendentes o descendentes del precio de manera proporcional.

Durante tres meses, los productores agropecuarios cortaron las rutas del país enfureciendo al matrimonio, que interpretó la reacción como un golpe de Estado encubierto. Los sectores medios urbanos se plegaron al malestar de los chacareros* con manifestaciones en las principales ciudades del país. Se reprodujo, de ese modo, el clima “cacerolero” del año 2001, en lo que tenía de protesta, pero también de representación ausente. El Gobierno respondió ordenando la prisión de varios dirigentes rurales y lanzando fuerzas de choque a golpear a los que protestaban en las plazas.

Acorralado por el malhumor social, la presidenta se resignó a someter su resolución al Congreso. Consiguió que la Cámara de Diputados la aprobara, pero en el Senado las fuerzas quedaron empatadas, por lo que debió votar el vicepresidente, Julio Cobos, un radical cooptado por el kirchnerismo. Lo hizo en contra de las retenciones. La presidenta estuvo a punto de renunciar.

El conflicto con los sectores rurales remodeló al kirchnerismo. Produjo una parálisis económica que se acentuaría con la crisis internacional. En 2009 el PIB cayó un 2,5%. Además, se consolidó la imagen de un Gobierno negado al diálogo, con inclinaciones autoritarias. Esos factores están detrás de la derrota electoral de Néstor Kirchner, quien se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en junio de 2009.

El enfrentamiento con los productores rurales también influyó en la orientación política de Kirchner y su esposa. Recostados sobre una imagen

* Nota del editor: Dueño de una chacra o granja.

de la economía agropecuaria muy tradicional en la izquierda argentina, vieron en “el campo” a una oligarquía que ponía resistencia a la distribución más equitativa de los ingresos que ellos buscaban con las retenciones. Este argumento se monta sobre una visión conspirativa, según la cual el Gobierno es un agente democrático desafiado por poderes fácticos que se resisten a abandonar sus privilegios y que tienen como obedientes portavoces a los medios de comunicación. La contradicción de 2008 representaba, según las explicaciones de Cristina Kirchner, una reedición del *lock out* que en 1976 realizaron los empresarios contra otra Administración peronista, la de María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”, abriendo las puertas a la sanguinaria dictadura militar posterior.

El conflicto agropecuario fue la matriz de un discurso que el Gobierno ya nunca abandonaría. La premisa mayor de ese discurso es que en la Argentina existe una contradicción última entre la democracia, representada por el kirchnerismo, y distintas expresiones reaccionarias, que son la metamorfosis de la última dictadura. Esta narración, que acompaña desde hace cinco años la radicalización oficial, supone que entre la dictadura militar y los Gobiernos que la sucedieron, todos elegidos por el voto democrático, no hubo diferencia alguna de calidad. Ni siquiera con el de Carlos Menem, al que se adhirieron los Kirchner. La geometría de esta presentación es variable, ya que el disfraz de la dictadura puede vestir a actores diversos, según cuál sea la contradicción que perturbe al Gobierno en cada momento.

La reversión del ciclo recesivo, a partir de 2003, y la extraordinaria *performance* de los precios de las *commodities*, no alcanzan a explicar la expansión del producto que se verificó en la economía argentina de los últimos años. El Gobierno estimuló, como vector principal de ese proceso, el consumo.

Varios instrumentos estuvieron al servicio de ese estímulo. Entre ellos estuvo una política monetaria expansiva. La estrategia financiera, que mantiene la tasa de interés real con signo negativo, reforzó esa tendencia. Los bancos remuneran los depósitos a plazo fijo con una tasa de interés inferior a la tasa de inflación. Así se premia el gasto y se castiga el ahorro.

El gasto público no dejó de crecer. Lo hizo a tasas superiores al 30% anual. El Gobierno, cerrado al mercado de capitales, buscó financiamiento no convencional para esa expansión. Durante los primeros años, recurrió a préstamos de Hugo Chávez, hasta que el emir caribeño fijó en un 15% la tasa de uno de sus bonos, un mes antes de la caída de Lehman Brothers. Los Kirchner resolvieron entonces la estatización del sistema de previsión de pensiones, una alcancía que en aquel momento suministró al Tesoro 23.000 millones de euros para financiar el déficit fiscal.

Al mismo tiempo, los Kirchner favorecieron negociaciones laborales con aumentos de salarios también superiores a la inflación. En cambio, la relación del peso con las demás monedas, sobre todo con el dólar, fue mucho más estable. La tasa de devaluación estuvo en estos años muy rezagada respecto a la carrera de los precios domésticos. La combinación de estas variables derivó en una subida sistemática del salario real, con un aumento del poder adquisitivo en dólares.

El estímulo al consumo se sostuvo también gracias a una política energética propensa a ofrecer gas y electricidad a bajísimo precio. Mientras el precio internacional del barril de petróleo rondó los 100 dólares, los productores radicados en la Argentina debían convalidar un precio de 42 dólares, como consecuencia de las retenciones a las exportaciones. Con el gas la diferencia fue más notoria. El sistema de generación y distribución eléctrica le reconoce al productor local un precio de 1,5 euros por millón de BTU, cuando el mismo gas, extraído en Bolivia, se vende a 8 euros por millón de BTU*.

Las familias de Buenos Aires han venido pagando una factura de gas o de electricidad seis veces menor que la de un consumidor equivalente de San Pablo o Santiago de Chile. Esta estrategia provocó una expansión irracional de la demanda y una retracción de la oferta. Las inversiones fueron desalentadas porque los precios impedían su recuperación. Muchas empresas, sobre todo las de distribución de gas y electricidad, fueron empu-

* Nota del editor: Unidades Térmicas Británicas.

jadas al desastre. También se deterioraron muchísimo los servicios de transporte, en los que el subsidio estatal no alcanza a compensar la tarifa reducida. Esa decadencia se materializó en una catástrofe en febrero de este año: un tren suburbano, en pésimo estado, chocó contra el andén de una terminal provocando 51 muertes.

Para alinear a las compañías con los imperativos de corto plazo que rigen esta gestión de la economía, el kirchnerismo fomentó la captura de paquetes accionarios privados por parte de empresarios amigos. Ese *crony capitalism* tuvo una expresión arquetípica en la familia Eskenazi, incorporada en 2008 por presión de Néstor Kirchner a la empresa YPF, controlada por Repsol.

Los números que arrojó el experimento populista fueron los siguientes: desde el año 2003, el PIB de la Argentina creció un 66%, el salario real aumentó un 35%, pero la inflación acumulada fue del 200%.

Para comprender la naturaleza del kirchnerismo conviene observar esta organización de la economía a la luz de la política. El *boom* de consumo estuvo orientado, sobre todo, a los bienes duraderos: electrónicos y automóviles fabricados con insumos importados. Pero la inestabilidad de la moneda no alcanzó para formar un mercado de crédito hipotecario.

La economía argentina de estos años expresa, como cualquier ensayo demagógico, un intento de maximizar el presente sacrificando la perspectiva del futuro. La penalización del ahorro y de la inversión, y el estímulo con consumo y el gasto son la expresión material de esa axiología. Por debajo de ella palpita una política que no pudo recuperar la autoridad desde la hecatombe del año 2001 y que, por lo tanto, se siente incapaz de convocar a la sociedad hacia objetivos de largo plazo.

En octubre de 2010 murió Néstor Kirchner como consecuencia de un infarto. En la relación de la sociedad con su esposa se introdujeron nuevos componentes emocionales. Además, el oficialismo se liberó de una figura cuya carga negativa se había convertido en un activo tóxico. Pero es indudable que la percepción de bienestar que provocó la política económica está entre las razones más poderosas del triunfo electoral del 23 de octu-

bre pasado, cuando la presidenta consiguió su reelección. Sobre todo porque esa percepción tomaba como referencia el decaimiento de 2009.

Esos comicios son una radiografía del desequilibrio de poder que aqueja a la vida pública argentina. Cristina Kirchner obtuvo el 54% de los votos. Su competidor más cercano, el 17%. Esa distribución del respaldo electoral determina una forma de funcionamiento del país.

En esas elecciones quedó consagrado un monopolio. El kirchnerismo retuvo el poder ejecutivo, controlaba las dos cámaras del legislativo y ejercía el mando a través de gobernadores propios o aliados en 23 de los 24 distritos del país.

Como sucede en toda situación monopolista, la calidad de los productos tiende a degradarse. En este caso el producto es la Administración. La sociedad argentina depende muchísimo de que la presidenta tenga capacidad autocrítica, de que observe los problemas desde distintos ángulos y de que sus asesores sean competentes; también depende de su equilibrio emocional. A falta de un juego de fuerzas equivalentes, el país está a merced de la voluntad del que manda. Es mejor que esa voluntad esté iluminada.

En el caso de Cristina Kirchner esta necesidad es más aguda, ya que la concentración de poder revierte sobre el propio Gobierno. La toma de decisiones obedece a un estilo absorbente, fronterizo con el despotismo. Muy pocos funcionarios acceden a la presidenta, la mayoría pertenece al segundo escalón del área económica. Los que se le aproximan suelen reforzar su interpretación de la realidad. El secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el colaborador más cercano de la señora de Kirchner, ha impuesto una instrucción: "A Cristina no se le habla, se la escucha".

El Gobierno carece de macroeconomistas y se maneja con un secretario de Comercio, otro de Hacienda y un recaudador impositivo. Además, Cristina Kirchner marginó al equipo de trabajo de su esposo. Ella se rodea de una organización de personas de 30 a 40 años, denominada La Cámara, en homenaje a un presidente de los años 70 idealizado por la izquierda. Esos "jóvenes" son los ojos y oídos de la presidenta dentro de su

gabinete, para inquietud de ministros y secretarios de Estado, que ejercen sus funciones con temor.

El desequilibrio de poder envilece, además, a la sociedad civil. Le quita autonomía, la vuelve cortesana; sobre todo al empresariado. Los hombres de negocios se sienten sometidos a reguladores carentes de control, capaces de asignarles o quitarles su porción en el mercado. Ante ese riesgo, la mayoría prefiere obedecer y complacer al gobernante. Esa dinámica apaga el espíritu de asociación y, en muchos casos, favorece la corrupción. Las organizaciones empresariales se han aletargado en la Argentina. Este anodamiento refuerza el aislamiento del gobernante, que no recibe de la sociedad una visión independiente de cómo desarrolla su tarea.

Otra peculiaridad de las configuraciones de poder tan asimétricas es que el Gobierno tiende a abrir un conflicto con la prensa. El periodismo independiente es visto como el único límite al poder. Además, el triunfo contundente y, sobre todo, la derrota humillante del adversario, induce a una confusión de dos órdenes que la civilización occidental ha mantenido separados: el de la verdad y el de la validez. En las sociedades abiertas, el poder corresponde a quien tiene más votos, no a quien se supone depositario de una verdad. Pero en los regímenes en los que el que manda carece de adversarios competitivos, las críticas son recibidas como muestras de insolencia de quienes no se resignaron al resultado electoral. No es por casualidad que en América Latina las denuncias por ataques a la prensa florezcan en países que carecen de equilibrio de poder. O, dicho de otro modo, aquellos en los que el sistema de partidos colapsó y en los que un caudillo se ufana de hablar en nombre del pueblo: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia.

La disputa con los medios de comunicación es el eje central de la política oficial en la Argentina. El kirchnerismo promovió una ley de “desmonopolización” para suspender licencias de radio y televisión violentando derechos adquiridos. El Estado también avanzó sobre el mercado del papel para los diarios, y a los editores de los grandes diarios se les han imputado violaciones a los derechos humanos durante la década del 70, para tenerlos sometidos a una persecución penal.

Hay otro rasgo relevante de la escena que se ha configurado en la Argentina. Las tensiones que aparecen en el seno del oficialismo son más relevantes que la dialéctica Gobierno-oposición. Esta excentricidad se debe, en principio, a que la política económica está poniendo en tela de juicio el consenso kirchnerista en su propia base. La política económica tocó el límite; por tercera vez en la historia, el peronismo organizó una fiesta de consumo por la que es premiado en las urnas, en el mismo momento en que la fiesta ha terminado. Sucedió con Juan Perón en 1951 y con Carlos Menem en 1995.

Con Perón, los términos de intercambio con la Europa de posguerra comenzaron a ser desfavorables y comenzaron a faltar dólares. Con Menem, el flujo de capitales procedente de las economías avanzadas comenzó a sufrir infartos: efecto Tequila, crisis del sudeste asiático, *default* de la deuda rusa, devaluación brasileña. La convertibilidad se comenzó a quedar sin dólares.

¿Qué sucede hoy? A Cristina Kirchner le faltan dólares. La inflación galopante devoró la ventaja comparativa del tipo de cambio "alto". Con costos salariales en dólares que aumentan un 20% cada año, las empresas pierden competitividad. El *boom* de consumo se sostiene cada vez más con las importaciones.

Ante la pérdida del valor de la moneda, los ahorristas huyen hacia el dólar; buscan ponerse a salvo de una devaluación. El Gobierno hace lo mismo, aunque por otras razones: la reducción de la oferta energética obliga a importar combustibles por montos que la economía nacional ya no puede soportar. Las compras de gas y fueloil en el mercado internacional, que fueron de 3.500 millones de euros en 2010, saltaron a 7.700 millones en 2011 y serán este año de 9.600 millones de euros.

Mientras tanto, otros factores que determinan la inflación siguen activos: el gasto público y la emisión monetaria están desbocados. El ciclo expansivo ha llegado a su última frontera; a una estrategia que durante años solo prestó atención al presente le ha alcanzado el futuro. El kirchnerismo debe comandar un ajuste económico.

El modo en que lo está haciendo aumenta las dificultades. En principio, teme recurrir al mercado de deuda por las condiciones que le pondría ese mercado. Entre otras, sincerar la contabilidad. Néstor Kirchner y su esposa demolieron el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Cuando las oficinas provinciales consignan niveles de inflación de 21 o 22%, el INDEC informa de un 9%. El Gobierno tampoco quiere devaluar por temor a que aumente la inflación. Además, los populismos son revaluatorios por su fobia a ajustar los salarios.

Por lo tanto, para conseguir los dólares que le faltan, Cristina Kirchner decidió cerrar la economía. Las importaciones cayeron en abril un 15% interanual. Cuarenta y un países protestaron en la OMC por la arbitrariedad de ese bloqueo. La Argentina se convirtió en uno de los países de la región con menor tasa de inversión extranjera directa en relación con el volumen de su economía, después de Bolivia y Venezuela.

De ese encapsulamiento deben salir los dólares para pagar la factura de las importaciones energéticas. En este marco debe interpretarse la estatización de casi todo el paquete accionario de Repsol en YPF; la medida se adoptó ante la resistencia de los dueños de la empresa a absorber a pérdida el costo de las compras de gas, gasoil y fueloil. Los Eskenazi escucharon esa exigencia de parte de la presidenta a fines de diciembre. Se negaron, escudándose en la reticencia de los accionistas españoles. La señora de Kirchner se indignó; ella entendía que esa familia estaba en YPF para representar al Gobierno, pero estos socios locales tampoco adelantaron el conflicto a los directivos de Repsol, por miedo a desnudar que ya no eran útiles como intermediarios con el poder. La lógica del *crony capitalism* se quebró. YPF pasó al control del oficialismo, que asumió más responsabilidades en la crisis energética derivada de su política económica.

Las consecuencias de toda la estrategia son previsibles: la industria se va quedando sin insumos y en los comercios faltan artículos de todo tipo, incluso medicamentos. El costo de la receta es altísimo. La economía comenzó a enfriarse. Los cálculos más realistas afirman que este año el producto no crecerá más del 1%, pero la inflación rondará el 26%.

Estas novedades se proyectan sobre los intereses de actores muy ligados al Gobierno. Los sindicalistas, entre los cuales destaca el líder de los camioneros, Hugo Moyano, toman distancia de la presidenta ante la inminencia de que, por primera vez desde 2003, se les fuerce a acompañar una caída en el salario real.

Los gobernadores de provincia, que constituyen la otra viga maestra del edificio peronista, comienzan a sufrir los efectos de la recesión. La recaudación cae por el enfriamiento económico y genera tensiones, sobre todo con los trabajadores del Estado. Daniel Scioli, que está al frente de la provincia de Buenos Aires, comenzó a expresar su desencanto. Acaba de postularse como candidato a presidente en un proyecto de poder alternativo al de Cristina Kirchner.

Los conflictos de la sociedad se escenifican, una vez más, en el seno del peronismo. Convertido en fuerza hegemónica, ese partido es capaz de funcionar como un único sistema: puede ser Gobierno y oposición al mismo tiempo.

No es indiferente a la calidad de la vida pública que la discusión de los problemas se tramite por la disidencia de sectores del propio oficialismo. Los partidos de la oposición debían cumplir la función principal e irrenunciable de ofrecer una visión alternativa de las cosas, señalando los errores con toda claridad. Las sociedades que carecen de ellos, y asignan esa función a los disidentes del oficialismo, pagan un costo altísimo. Esos disidentes expresan su malestar ahora que las llamas del incendio se han vuelto abrasadoras.

La extravagancia de que el peronismo sea Gobierno y oposición a la vez deriva de otra característica de la política argentina: el Frente Amplio Progresista, que salió segundo en el octubre pasado, y el radicalismo, que obtuvo el tercer puesto con el 16% de los votos, piensan, en general, igual que el kirchnerismo. Es decir, el Gobierno consiguió el 54% de respaldo en el electorado, pero obtuvo más de 80% de consenso en el seno de la clase política.

Esta complicidad en el populismo bloquea hoy en la Argentina cualquier discurso de ruptura. Es la razón principal de la imposibilidad de re-

construir una alternativa al peronismo. La emergencia de los Kirchner y su decisivo liderazgo impide ver que acaso la consecuencia más importante de la tormenta de comienzos de siglo ha sido el hundimiento del radicalismo. Durante más de cien años ese partido había sido el instrumento de intervención de los sectores medios en la esfera pública.

La reconstrucción de un contrapunto que equilibre y centre el sistema de poder es el inmenso desafío que tiene la sociedad argentina frente a sí. Si no realiza esa tarea, el riesgo político espantará la inversión, con consecuencias cada vez más dolorosas para la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo de los más desamparados. El establecimiento de un mercado político, en el cual varias fuerzas compitan entre sí garantizando la rotación en el poder, reinstalaría un debate. Vaciada de contenido intelectual, la política ha perdido su dimensión programática. Esa reanimación de la discusión conceptual de los problemas es la única posibilidad de que la Argentina vuelva a fijarse un horizonte de largo plazo. La razón es muy sencilla: el pasado y el presente son objetos de experiencia; el futuro solo es susceptible de ser pensado.

PALABRAS CLAVE

América Latina • Argentina • Crisis económica • Populismo • Formas actuales de pensamiento antiliberal

RESUMEN

Las elecciones argentinas de octubre del año pasado, diez años después de la crisis del “corralito” del 2001, evidenciaron los problemas del sistema político argentino. Después de una época de bonanza económica, el kirchnerismo se ve ahora incapaz de afrontar con garantías la situación actual y plantea serias dudas sobre el futuro a corto plazo de no llevar a cabo la reconstrucción que el país necesita.

ABSTRACT

Argentina's elections, held in October last year, ten years after the corralito crisis of 2001, provided evidence of the problems of the Argentinean political system. After a time of prosperity, kirchnerism seems now incapable of facing the current situation with sufficient guarantees and poses serious doubts about its short term future if the country is not reconstructed as it sorely needs.